

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 11 de Abril del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Don Bernardo Menendez, contra los procedimientos del Juez de Letras de San Juan Bautista que han dado origen á este recurso.

Devuélvanso las actuaciones al Juzgado de su origen acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Ostañeda y Najera.*—*Simon Guzman.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 22 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el Lic. Saturnino Contreras, contra los procedimientos del Gefe político del Mesquital, que con violacion de las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución federal, ha intervenido y embargado los frutos de las minas "Corazon de Jesus" y "Guadalupe."*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de Hacienda que desempeña la voz fiscal dice: que el C. Saturnino Contreras, segun consta en el cuaderno 2º fo-

jas 13 á 22, ademas de haber efectuado el despilaramiento de la mina "Corazon de Jesus" cometió algunos abusos con los trabajadores y aun con las autoridades mismas á quienes se propuso burlar y en efecto burló. Dice ser dueño absoluto de la negociacion, exponiendo: que ninguno tiene derecho para intervenir; mas como estos argumentos son agenos del objeto de este recurso, limitándonos á la cuestión sobre violacion de garantías que sostiene el promovente, seguiremos el hilo de los hechos.

Las pruebas parece que arrojan para Contreras un resultado contraproducente, supuesto que en ellas, segun queda dicho, se ven patentizados todos los hechos de los que se le hacen cargo á Contreras. Este no ha presentado ninguna autorizacion para el despilaramiento de la mina. Se nota, por el contrario, en el acuerdo del Gobierno, le pareció muy extraño se hubiese procedido al despilaramiento sin autorizacion ninguna, con lo que se prueba que Contreras obró por su propia autoridad. Los demas abusos cometidos por Contreras constan como queda dicho, en las diligencias desde la foja 13 hasta la 22.

Para reprimir pues estos abusos fué necesario interviniese la autoridad competente, que no es otra sino el Gobierno del Estado y el Gefe político con la facultad que le concede el artículo 66 de la Constitución del Estado, para cuidar de la seguridad de las personas y bienes de los habitantes de su comprension. Las medidas puestas en práctica por la Gefatura política, no importan una sentencia en las cuestiones particulares de los socios, ni la decision sobre los puntos de derecho que cada parte sostenga, para lo cual sin duda carece de facultades la Gefatura política. Esas medidas ó esas disposiciones pueden tenerse por meramente precautorias, cuyo objeto tiende á cuidar de la tranquilidad pública y de la seguridad de las personas y bienes de los habitantes de su comprension. Resulta pues, que el Gefe político no ha violado la ga-

rantía consignada en el artículo 15 de la Constitución general de la República, por que además de ser autoridad competente no ha hecho otra cosa que prestar su auxilio y favorecer á los quejosos contra los abusos del Lic. Contreras, interin la cuestion se decide por las autoridades judiciales. Fundado el fiscal en las razones expuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, pide á V. se sirva fallar denegando el amparo en este juicio é imponiendo al promovente la pena que establece el artículo 16 de la ley últimamente citada.

Durango, Abril 21 de 1874.—*Juan Nájera*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, 3 de Junio de 1874.—*Juan Nájera*.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Durango, Mayo 30 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Saturnino Contreras, en contra de los procedimientos del C. Gefe político del Mesquital, en cuya virtud fueron intervenidos los productos de las minas del "Corazon de Jesus" y "Guadalupe" y suspendidos los trabajos de laborio, beneficio y demas concernientes. Teniendo en cuenta el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, lo pedido por el Ministerio Fiscal y cuanto mas ver convino

Considerando: que de autos consta, 1º: Que el Gobierno del Estado concedió al C. Lic. Saturnino Contreras el permiso para despilarar las minas de que se ha hecho mencion, cuya autorizacion consta en primer lugar, de la comunicacion del C. Gefe político (fojas 31 cuad. 2º) en que trascribe la de la Secretaria del Gobierno; y en donde expresamente se ven estampados los siguientes conceptos: "suspendiendo entre tanto la providencia del Gobierno, en cuya virtud se autorizó para aquel objeto al C. Lic. Saturnino Contreras;" y en segundo lugar, por el informe del mismo Gobierno, que última-

mente ha presentado el C. representante del fisco; pues á la foja 38 del cuaderno 1º se leen las siguientes palabras: "Al C. Gefe político del Mesquital que mande los antecedentes, suspendiendo la autorizacion concedida al C. Contreras para despilarar la mina "Corazon de Jesus."

2º: Que en virtud de la Orden de Gobierno, y en su carácter de poseedor exclusivo, segun aparece del documento del contrato relativo, (fojas 3 cuad. 2º) y de la aseveracion de D. Pedro Campos, (fojas 4 cuad. 3º,) pudo muy bien el C. Lic. Contreras proceder, como en efecto procedió, al despilaramiento de las minas mencionadas.

3º: Que cuando se estaban efectuando aquellas operaciones, ocurrió el contratante D. Pedro Campos en su calidad de dueño legitimo, al Gobierno del Estado oponiendose á aquellas medidas y pidiendo se revocara la autorizacion de despilarar, que se habia concedido.

4º: Que vista la oposicion fundada y racional de D. Pedro Campos, el Gobierno mandó suspender la autorizacion que habia dado, y pidió el informe correspondiente al C. Gefe político del Mesquital.

5º: Que á esto debieron haberse limitado las disposiciones y providencias del referido Gefe político, y no proseguir adelante como lo verificó.

6º: Que de autos consta, que mandó intervenir la mina, y depositar los frutos que en ella se encontraron, (órdenes que corren de la foja 25 á la 20, cuad. 2º)

Considerando: que habiendo sucedido las cosas de la manera que se han expuesto, y verificado el hecho del C. Gefe político de que se ha hecho arriba mencion, es conveniente examinar si éste al dar aquella providencia, lo hizo en ejercicio de las facultades que la ley le concede.

Que la providencia de que se hace referencia en la fraccion 6ª, aun en calidad de meramente precautoria, y supuesta la contradiccion de los contendientes, pertenece

á los actos comprendidos en la esfera de la accion judicial, y solo ha podido dictarse ejerciendo jurisdiccion contenciosa.

Que por el artículo 15 de la ley del Estado de 15 de Mayo de 1863, expresamente previene: "que los Gefes de Partido no pueden ejercer jurisdiccion contenciosa civil ó criminal."

Que la jurisdiccion contenciosa es propia y exclusiva del poder judicial, y á él solo corresponde ejercerla.

Que por lo expuesto, la providencia de que se viene tratando expedida por el C. Gefe político, ha sido dictada en el caso, por autoridad incompetente.

Que en este supuesto, se ha violado la garantía consignada en el artículo 16 de la Carta fundamental de la República, que previene, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino á virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.

Que cuando hay violacion de garantías individuales, procede el recurso de amparo, segun así lo determina el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Por tales fundamentos, se decreta: 1º: Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Saturnino Contreras, contra la providencia del C. Gefe político del Partido del Mesquital, en cuya virtud fueron intervenidos los productos de las minas del "Corazon de Jesus" y "Guadalupe," y suspendidos los trabajos concernientes. 2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Pedro Campos en su solicitud contra los procedimientos del mismo Gefe, emanados de la orden de suspension dictada por este Juzgado en el amparo promovido por el Lic. Contreras. 3º: Publíquese esta sentencia y remítanse las presentes actuaciones á la Suprema Corte para su revision, sacándose las copias correspondientes para la Redaccion del "Semanario Judicial." Y por este ante así lo proveyó y firmó el C. Juez de Distrito Lic. Gerónimo Sida, por ante mí. Doy fé.—*Gerónimo Sida.*—*J. B. Arellano, secretario.*

Es copia que certifico. Durango, Mayo 30 de 1874.—*J. B. Arellano, secretario.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Agosto 12 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el Lic. Saturnino Contreras, contra los procedimientos del Gefe político del Mesquital, que con violacion de las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitucion federal, ha intervenido y embargado los frutos de las minas "Corazon de Jesus" y "Guadalupe," mandando suspender al mismo tiempo los trabajos de laborio y beneficio. Visto el incidente suscitado por el C. Pedro Campos solicitando igualmente el amparo de la Justicia federal, contra el expresado Gefe político, por violacion tambien de la garantía que consigna el artículo 16 constitucional, con el hecho de intentar poner en posesion de las mencionadas minas al Lic. Contreras, bajo pretexto de dar cumplimiento al auto de suspension dictado por el Juez de Distrito en el recurso de amparo promovido por el mismo Contreras; visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino; y

Considerando: que segun aparece de las constancias de autos, el Gobierno del Estado mandó suspender los trabajos de despilaramiento que estaban ejecutando por el Lic. Contreras en las mencionadas minas; y que el Gefe político, con objeto de dar cumplimiento á esta disposicion, ordenó la suspension de esos trabajos y que intervinieran los productos de las minas.

Considerando: que las Ordenanzas de Minería de 1873 vigentes en el Estado de Durango, consideran como un delito el despilaramiento de las minas.

Considerando: que el Lic. Contreras aun cuando segun alega, estuviera autorizado por el Gobierno del Estado para despilarar

las minas, desde el momento en que se mandaron suspender por el mismo Gobierno los trabajos emprendidos con ese objeto, no pudo continuarlos sin hacerse reo de un delito previsto y castigado por las leyes.

Considerando: que es una facultad y al mismo tiempo uno de las principales deberes de las autoridades políticas, impedir los delitos, y tomar para ello las providencias oportunas y necesarias; y por consiguiente, que el Gefe político del Mesquital estaba plenamente autorizado, por razón de su cargo, para impedir la continuación de un acto punible, cual eran los trabajos de despilarramiento que el Gobierno de Durango había ya mandado suspender.

Considerando: que no se puede decir otro tanto respecto de la providencia de embargo de los frutos de las minas, por no tener por objeto inmediato impedir se continuara cometiendo un acto prohibido por la ley, que era á lo único á que se estendian las facultades del Gefe político en el caso presente, en virtud de pertenecer el delito al conocimiento de la autoridad judicial.

Considerando, en cuanto á la solicitud de Don Pedro Campos: que no es admisible como interposición de un nuevo recurso de amparo, contra el auto de suspensión dictado por el Juez de Distrito en el recurso de igual clase promovido por el Lic. Contreras, pues la ley de 20 de Enero de 1869 por su artículo 6 no concede mas recurso contra el auto de suspensión, que el de responsabilidad.

Considerando: que con el carácter de incidente y como una queja contra el Gefe político por haberse extralimitado á dar otras disposiciones que las que contenia el auto de suspensión, tampoco ha habido lugar á acceder á la solicitud de Don Pedro Campos, por no estar justificado, que dicha autoridad hubiera intentado poner en posesion de las minas al Lic. Contreras.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

1º: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Durango en 30 de Mayo del presente año, en la parte que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al Lic. Saturnino Contreras, contra las providencias del Gefe político del partido del Mesquital, en cuya virtud fueron intervenidos los productos de las minas "Corazon de Jesus" y "Guadalupe"

2º: Se revoca el mismo fallo en la parte que concede el amparo al Lic. Contreras, contra la órden de suspensión de los trabajos de despilarramiento de las minas, que dictó la misma autoridad, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al expresado ciudadano, contra esta providencia.

3º: Se confirma igualmente el fallo del inferior en la parte que declara: que no ha lugar al amparo de la Justicia federal á favor de Don Pedro Campos, por los procedimientos del Gefe político, emanados de la órden de suspensión dictada por el Juzgado de Distrito en el amparo promovido por el Lic. Contreras.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 21 de Setiembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor."